

# Una crisis interminable: estrategias para resistir y primeros síntomas de sobrecarga en las familias<sup>1</sup>

**Lucía Martínez Virto**

Universidad Pública de Navarra

<lucia.martinez@unavarra.es>

Krisi ekonomikoa uste baino luzeagoa izan da. Lan merkatuaren egoera txarrak eta prestazio asko bukatzeak berebiziko garrantzia eman die familia eta gizarte-sareei, sare horiek izan direlako beren inguruan behar handiko egoeran zeudenei aterabidea emandakoak. Familiaren elkartasuna da, inolako zalantzarik gabe, baliabide garrantzizko bat zailtasun horiei aurre egiteko; baina baliteke familiaren baliabidea behin eta berriz erabiltzeak eta zailtasunen areagotzeak ohiko koltxoi hori ahuldu izana. Artikulu honetan, oinarrizko beharrak zeuzkatenei edo egoitza izatetik baztertua zeudenei laguntzeko familiek garatu dituzten erresistentzia eta laguntza moduak agertzen dira. Ekimen luze horien ondorioz, elkartasun familiarra agortzen ari dela erakusten duten lehen sintomak ikusten hasi dira (gainkarga, liskarrak, buru-nahasmenduak, mendekotasunak), eta nabarmentzen ari dira babes horiek galtzeak ekar ditzakeen arrisku larriak.

## **GAKO-HITZAK:**

Krisialdi ekonomikoa, familia, familien estrategiak, familiaren gainkarga, gizarte-bazterketa, pobrezia

La crisis económica se ha prolongado más de lo esperado, la hostilidad del mercado de trabajo y el agotamiento de muchas prestaciones han hecho que las redes familiares y sociales adquirieran un papel cardinal para rescatar a sus núcleos cercanos de realidades de intensa necesidad. La solidaridad familiar es, sin duda, un potente recurso para amortiguar estas dificultades, pero la necesidad de recurrir a ella y la extensión de las dificultades han podido debilitar este tradicional colchón. A lo largo de este artículo, se exponen las diversas formas de resistencia y ayuda desarrolladas por los hogares en la crisis para prevenir privaciones básicas o situaciones de exclusión residencial. A partir de las consecuencias de estas acciones prolongadas, se identifican los primeros síntomas de agotamiento de la solidaridad familiar (sobrecarga, conflictividad, adicciones, trastornos mentales, adicciones) poniendo de relieve los graves riesgos que puede provocar la pérdida de este importante apoyo.

## **PALABRAS CLAVE:**

Crisis económica, familia, apoyo familiar, estrategias familiares, sobrecarga familiar, exclusión social, pobreza.

<sup>1</sup> Este artículo corresponde a la revisión y actualización del estudio *Crisis en familia. Síntomas de agotamiento de la solidaridad familiar*, realizado por Lucía Martínez Virto dentro de la serie Documento de Trabajo del VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, editada por la Fundación FOESSA y Cáritas Española en 2014.

## 1. Introducción

Las familias en España han ocupado un espacio relevante, ampliamente analizado en el ámbito académico, como agente de bienestar e integración. El papel fundamental que las familias mediterráneas vienen ejerciendo en la provisión de bienestar y en la garantía y asentamiento de las situaciones de integración social ha sido demostrado en numerosos trabajos previos, tanto en el plano teórico como empírico (Sarasa y Moreno, 1995).

Asimismo, se ha alcanzado un cierto consenso teórico que reconoce que las situaciones de exclusión e integración no vienen exclusivamente definidas por el acceso a realidades de bienestar económico, como tener empleo que reporte de cierta seguridad y estabilidad vital, o por el reconocimiento de unos derechos sociales y el compromiso del Estado de bienestar de garantizar algunos ámbitos de bienestar a través de los sistemas de protección social. Las situaciones de exclusión e integración se asientan también sobre un tercer pilar construido a través de los niveles primarios de protección y solidaridad que ofrecen las familias y las redes sociales. El papel que éstas juegan se define, especialmente, por la capacidad que, en momentos de dificultad, pueden tener para prevenir y compensar las situaciones de vulnerabilidad de sus familiares. Por el contrario, su inexistencia o conflictividad podría contribuir a acentuar la gravedad de las necesidades e incluso cronificarlas (Laparra *et al.*, 2007).

La capacidad de las familias de amortiguar la crisis quedaba constatada en numerosos trabajos que abordaban el primer impacto de ésta en términos de exclusión y bienestar en los hogares (Cantó, 2010; Laparra y Pérez, 2011; Meil, 2011). Sin embargo, a pesar de este innegable papel, estudios como Laparra y Pérez (2012) empezaban a detectar que, tras varios años de crisis económica, el recurso tradicional de la solidaridad familiar como soporte básico para enfrentar los problemas sociales comenzaba a mostrar ciertos síntomas de sobrecarga y agotamiento. A pesar de estos primeros síntomas de límite, ante esta crisis prolongada el modelo de solidaridad tradicional continuaba siendo cardinal como amortiguador de las necesidades. En este sentido, las personas sin redes de apoyo, las familias con disfuncionalidades o las sobrecargadas podrían ser aquellas con una menor capacidad de resistencia a las situaciones de dificultad (Moreno y Marí-Klose, 2013).

Acercarse a las familias y constatar si la extensión de la crisis y el agravamiento de las situaciones de necesidad de los hogares están limitando la capacidad de apoyar de estas redes primarias es precisamente el objetivo de este artículo. A lo largo de él, se identificarán las formas de resistir a la crisis, la extensión de las necesidades y su perverso efecto, concatenado en la propia reducción de la capacidad de apoyo de las familias. Todo ello sobre una hipótesis fundamental: la crisis se enfrenta mejor con familia que sin ella. Sin embargo, frente a las situaciones de dificultad,

ni todos los hogares tienen las mismas posibilidades de desarrollar trayectorias de inclusión, ni todos responden del mismo modo a las necesidades. La capacidad y voluntad de respuesta en momentos de dificultad se encuentra determinada por las dinámicas familiares y por la posibilidad de encontrar u ofrecer ayuda. Por tanto, disponer de una red de apoyo informal puede resultar clave para prevenir caídas en situaciones de exclusión o escenarios de mayor dificultad, mientras que, por el contrario, aquellos hogares aislados o sin apoyos serían más susceptibles de desarrollar trayectorias de exclusión marcadas por una fuerte concatenación progresiva de situaciones de dificultad.

## 2. No tener ayuda desprotege, pero a ¿qué se debe?

La creencia de que las redes de solidaridad colectiva han sido, desde las sociedades más remotas, una garantía para la supervivencia y mantenimiento del grupo queda constatado en el reconociendo que sociólogos clásicos como Durkheim (1893), Weber (1956) o Simmel (1908) hacen del vínculo social. A través de sus numerosos trabajos, se puede comprobar que identifican este lazo como aquel que, por un lado, puede promover dinámicas solidarias y empáticas que, en momentos de necesidad, actuarían como apoyos en la búsqueda de cohesión y estabilidad social. Por otro lado, que si está construido a partir de relaciones conflictivas u hostiles, o no existe, también puede impulsar el aislamiento y la fragilidad social. Por tanto, a partir de estas referencias no es arriesgado pensar que la presencia en los hogares de redes con capacidad de apoyo podría compensar algunas situaciones de necesidad.

La dificultad de medir las relaciones sociales, la frecuencia de los flujos de ayuda entre núcleos o la intensidad de éstos es un obstáculo importante que dificulta la cuantificación del impacto que las redes de ayuda están teniendo como amortiguador de la crisis. Afortunadamente, la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación Foessa (EINSFF) [Lorenzo Gilsanz, 2014] permite constatar algunas de estas cuestiones, gracias a la incorporación de preguntas al cuestionario como, por ejemplo, ‘¿Tiene o ha tenido alguna persona que pueda ayudarle cuando tiene problemas?’. A partir de esta pregunta, se ha constatado que, en 2013, tres de cada cuatro hogares en España manifiestan tener ayuda en momentos de necesidad (75,1%). Por el contrario, el porcentaje de hogares que no la tiene es casi de un 25 % del total (24,9 %). Es decir, uno de cuatro hogares manifiesta no tener alguna persona que pueda ayudarlo en momentos de necesidad.

Si se retoman las reflexiones teóricas anteriormente mencionadas, se observa que el reconocimiento del vínculo social no sólo se identifica desde una perspectiva optimista, sino que se señala que si este lazo está construido a partir de relaciones conflictivas u hostiles, también puede impulsar el aislamiento

y la fragilidad social. Por ello, para comprender las razones por las que los hogares no tienen ayuda es importante atender a la posible vinculación existente entre las situaciones de exclusión social, y la pérdida de apoyos y relaciones.

En esta línea existe también una amplia tradición de análisis, sobre todo impulsados desde la sociología francesa, que señalan la estrecha vinculación entre el desarrollo de procesos de exclusión laboral, por ejemplo, y el deterioro o la pérdida de relaciones sociales (Paugam, 1994). En relación con ello, en un contexto de alta tasa de desempleo cabría pensar en que el incremento de la tasa de paro produce un gran deterioro de las relaciones sociales.

En la Tabla 1 se recogen, por un lado, las implicaciones que estar en situación de conflictividad y aislamiento social tiene en el desarrollo de los procesos de exclusión en materia de empleo, pobreza o consumo, exclusión política, educativa, de vivienda o de salud; y por otro lado, la incidencia de los diferentes procesos de exclusión en vivir situaciones de aislamiento o conflicto.

Tal y como señalan los datos anteriores, la exclusión en el empleo se ha incrementado entre 2007 y 2013 en los hogares en situación de conflicto y aislamiento social. En el primero de los casos, se observa un incremento de más del doble (del 26,2 % al 59,2 %), es decir, seis de cada diez hogares en conflicto social están afectados por la exclusión del empleo. En un contexto donde el acceso al empleo encuentra numerosos obstáculos para todas las personas, aquellas con comportamientos estigmatizados quedan, mayoritariamente, fuera del mercado. En lo que respecta a la incidencia de las situaciones de aislamiento, se produce un incremento menor, pues aumentan en 7,8 puntos porcentuales (del 14,6 % al 22,4 %).

Por tanto, los resultados muestran que, efectivamente, las personas en conflicto social o aislamiento están más excluidas del desempleo. Este hecho parece evidenciar que el capital social continúa siendo un importante factor de empleabilidad, que permite tanto aumentar las posibilidades de acceder al empleo como prevenir su pérdida.

Además de la incidencia de estas situaciones de aislamiento y conflicto en el ámbito laboral, se observa que los procesos de exclusión sanitaria casi se duplican en los hogares aislados. Ello podría deberse, por un lado, a que son hogares que cuentan con menos recursos de apoyo que amortigüen los recortes en salud; y por otro, a un mayor riesgo de estas personas de padecer problemas de salud mental o adicciones como consecuencia de las situaciones de dificultad social o desempleo (Cortès-Franch y González López-Valcárcel, 2014).

La incidencia que las situaciones de aislamiento social tienen en el desarrollo de procesos de exclusión sanitaria o en el empleo se reduce si observamos las situaciones de exclusión residencial, debido a que entre 2007 y 2013 se produce una reducción de 6,3 puntos (del 32,7 % al 26,4 %) en los hogares aislados. Los procesos de exclusión residencial, generalmente vinculados a la pérdida o al riesgo de perder la vivienda, podían estar siendo compensados, tal y como constataban anteriores análisis, como Laparra y Pérez (2011, 2012), a través de estrategias de reagrupación familiar, apoyo económico para prevenir impagos u otras alternativas en la prevención de la pérdida de vivienda, como el alquiler compartido o el subalquiler de habitaciones, estrategias que requieren un importante soporte familiar.

Por otro lado, se señalaba anteriormente la posibilidad de que el desempleo tuviera, además de efectos inmediatos de carácter económico, cierta relación con el aislamiento social. En este caso, los resultados señalan que el impacto de las situaciones de exclusión del empleo en los procesos de aislamiento social se reduce del 7,1 % en 2007 al 3,9 % en 2013. Esta reducción podría deberse a que, en un contexto con alto desempleo generalizado, la pérdida de éste, en materia relacional, no supone el debilitamiento del lazo social que quizá podría ocurrir en escenarios con menor tasa de paro. No obstante, si se realiza un análisis por espacios de exclusión, se constata que, para los hogares en exclusión severa, la pérdida del empleo sí supone un incremento de casi tres puntos de la incidencia de las situaciones de aislamiento (de 9 % a 11,8 %). Con este resultado, se observa que, si bien en un análisis general por hogares los

**Tabla 1. Relación entre las diferentes dimensiones de la exclusión social. España, 2007, 2009 y 2013 (% de hogares)**

|                                      | Incidencia de las situaciones de conflictividad/ aislamiento social en los procesos de exclusión (hogares en conflictividad/aislamiento social) |      |      |                    |      |      | Incidencia de los procesos de exclusión en situaciones de conflictividad/aislamiento social (hogares con procesos de exclusión) |      |      |                    |      |      |
|--------------------------------------|---|------|------|--------------------|------|------|---|------|------|--------------------|------|------|
|                                      | Conflicto social  |      |      | Aislamiento social |      |      | Conflicto social  |      |      | Aislamiento social |      |      |
|                                      | 2007  | 2009 | 2013 | 2007               | 2009 | 2013 | 2007  | 2009 | 2013 | 2007               | 2009 | 2013 |
| Exclusión del empleo                 | 26,2  | 41,4 | 59,2 | 14,6               | 14,7 | 22,4 | 8,4   | 10,6 | 9,6  | 7,1                | 3,8  | 3,9  |
| Exclusión económica, pobreza extrema | 4,4   | 3,3  | 8,4  | 1,8                | 4,1  | 3,0  | 9,5   | 8,5  | 10,6 | 5,9                | 10,8 | 4,1  |
| Exclusión política                   | 30,6  | 29,8 | 16,8 | 14,6               | 17,1 | 18,6 | 11,7  | 9,1  | 7,3  | 8,5                | 5,2  | 8,8  |
| Exclusión de la educación            | 23,0  | 13,0 | 15,2 | 5,4                | 13,9 | 8,9  | 11,0  | 6,8  | 10,3 | 3,9                | 7,5  | 6,6  |
| Exclusión de la vivienda             | 37,9  | 34,9 | 46,1 | 32,7               | 22,1 | 26,4 | 9,4   | 10,7 | 10,1 | 12,6               | 6,8  | 6,2  |
| Exclusión de la salud                | 27,3  | 24,7 | 39,4 | 13,2               | 19,4 | 24,8 | 11,9  | 14,2 | 11,9 | 9,3                | 11,2 | 8,1  |

Fuente: EINSFF (2007, 2009 y 2013).

procesos de exclusión en el empleo en 2013 no parecían suponer un aumento de las situaciones de aislamiento social, las tesis que defienden que la pérdida del empleo trae consigo un aumento del aislamiento social se ven respaldadas en los hogares de alta exclusión.

### 3. Los hogares sin ayuda son los más vulnerables

Las evidencias empíricas señaladas constatan cierta vinculación entre las situaciones de conflicto y aislamiento social, y el desarrollo de procesos de exclusión social en materia laboral, residencial o sanitaria, entre otras. Asimismo se adelantaba al inicio que, a pesar de que se intuyan síntomas de sobrecarga, la solidaridad informal permanece activa para tres cuartas partes de la sociedad española. Sin embargo, uno de cada cuatro hogares no cuenta con ayuda cuando la necesita.

Los hogares que manifiestan no contar con apoyos están encabezados por varones, de entre 45 y 54 años, y con estudios bajos o medios. Este perfil se dibuja a partir de una mayor incidencia, entre los hogares que no tienen ayuda, de los núcleos con sustentador principal varón (26,2 %; para las mujeres, en cambio, la incidencia es del 22,2 %), de los encabezados por personas de entre 45 y 54 años (27 %), por personas analfabetas (28,2 %) y por aquellas sin estudios primarios obligatorios (24,7 %).

No obstante, además de estas características socio-demográficas, la falta de ayuda tiene más incidencia en algunas tipologías de hogares, como los monoparentales o los de origen extranjero. En el primero de los casos, la falta de ayuda es señalada por el 26,8 % de los hogares monoparentales. Por otro lado, 3 de cada 10 hogares extranjeros no tienen ayuda cuando

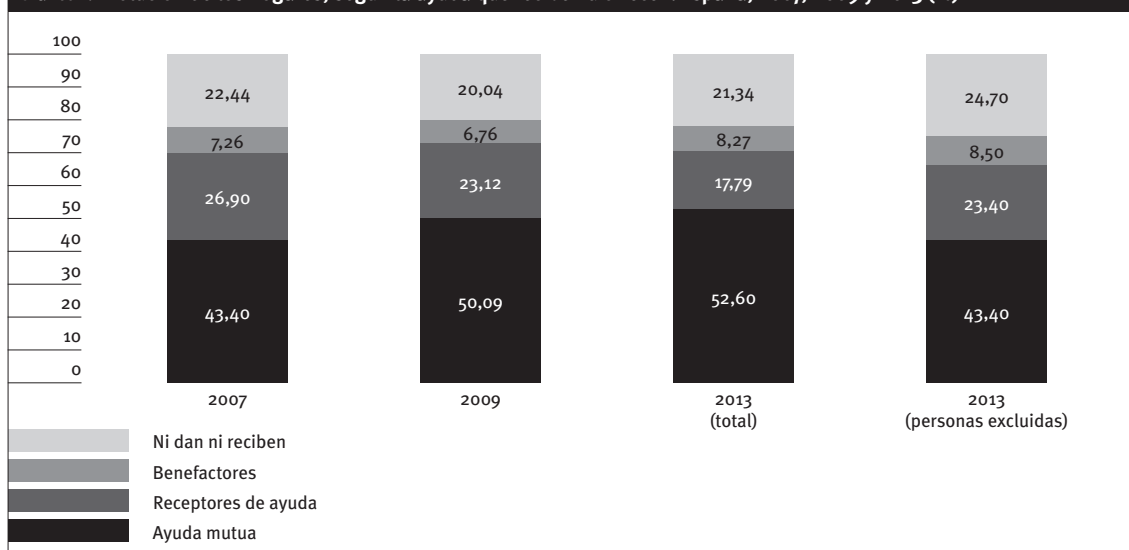
la necesitan (31,6 %), mientras que 7,5 de cada 10 personas españolas o con nacionalidad de la EU15 y 8 de cada 10 hogares españoles de origen étnico gitano manifiestan tenerla. Con todo ello, observamos que, además del sexo y la edad o nivel formativo, la tipología de hogar y su origen son factores que pueden determinar la capacidad de contar con apoyos en momentos de necesidad, y que los de origen extracomunitario o con una sola persona adulta cuentan con menos ayuda.

### 4. La solidaridad recíproca es el patrón de ayuda más desarrollado

Las dinámicas de apoyo surgidas en la crisis son casi tan variadas como los propios hogares y la intensidad, frecuencia e incluso las funciones de la ayuda (económica, residencial o emocional, entre otras) cambian de unas a otras familias, dibujando un mapa de solidaridad e intercambio de ayuda muy diverso. Esta heterogeneidad ha sido simplificada en cuatro tipos de ayuda que permitieran arrojar luz sobre estas dinámicas de apoyo entre hogares. En primer lugar, se identifican aquellos hogares que se ofrecen ayuda mutua, es decir, que brindan ayuda a otros hogares, pero que también la reciben si la necesitan. En segundo lugar, se encuentran aquellos receptores de las ayudas externas, debido a que reciben ayuda si la necesitan, pero no la dan. En tercer lugar, se observan los hogares benefactores, los cuales suministran ayuda a otros núcleos, pero no la reciben. Por último, los hogares que ni tienen ni dan ayuda, bien porque nunca la han necesitado o porque no cuentan con redes que los apoyen.

La tendencia de estos cuatro tipos de hogares se presenta en el Gráfico 1. En general, se observa cómo han aumentado ligeramente los hogares que reciben algún tipo de ayuda, pero lo que más claramente se ve

Gráfico 1. Evolución de los hogares, según la ayuda que reciben u ofrecen. España, 2007, 2009 y 2013 (%)



Fuente: EINSFF (2007, 2009 y 2013).

es que la ayuda mutua es la que más incidencia tiene con respecto al resto de ayudas, pues se da en más de la mitad del total de hogares en 2013 (52,6 %). Por otro lado, la dinámica menos habitual en 2013 es aquella en la que un hogar da ayuda, pero no la recibe, es decir, los hogares benefactores (8,3 %).

Con respecto a 2007, se observa una reducción del porcentaje de hogares que sólo reciben ayudas y de aquellos que ni las dan ni las reciben. Es decir, aumenta en general la ayuda recibida y se reducen, en 2013, en más de nueve puntos porcentuales los hogares que son sólo receptores de ayudas. La distribución de estos tipos de ayuda se mantiene similar en los hogares excluidos en 2013; sin embargo, aumenta casi seis puntos, con respecto al total de hogares de ese mismo año, los excluidos que son receptores de ayudas (del 17,8 % al 23,4 %).

Con esta foto se puede concluir que, en términos generales, respecto a 2007, se reduce el porcentaje de hogares que no dan ni reciben ayuda y de aquellos receptores de las ayudas externas, mientras que se incrementan los benefactores y aquellos que manifiestan ofrecerse ayuda mutua. Estos síntomas de solidaridad familiar mutua podrían deberse a un aumento generalizado de las dificultades cotidianas de los hogares en España.

Entre los hogares que desarrollan en mayor medida estas dinámicas de apoyo, se ha observado que las personas de más de 65 años se convierten en un apoyo fundamental, debido a que tienen una incidencia importante dentro de los hogares benefactores (15 %). Por el contrario, los hogares encabezados mujeres, por menores de 30 (26,6 %), con personas paradas (21 %), con menores o algún joven (20,8 % y 19,1 %, respectivamente), así como los de etnia gitana (19 %) tienen una mayor incidencia en los hogares que sólo reciben ayuda.

## 5. La reducción de los gastos y las ayudas externas entre las estrategias más desarrolladas

El efecto más inmediato del desempleo es la pérdida de capacidad y estabilidad adquisitiva de las familias. Según los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2013, los ingresos medios de los hogares en España se redujeron entre 2007 y 2012 de manera relevante. En 2012, el 40,88 % de los hogares en España poseían unos ingresos mensuales de entre 500 y 1.499 euros, un porcentaje que en 2007 alcanzaba el 37,3 %. Esta disminución de ingresos con los que cuentan los hogares supone, lógicamente, una reducción del gasto medio que efectúan. Según la misma encuesta, el gasto medio de los hogares españoles en 2007 era de 31.641,27 €, y en 2013, de 27.098 €, o lo que es lo mismo, una cantidad que se ha visto reducida en un 14,35 %. Por tanto, el gasto efectuado en 2013 supone el 85,65 % del realizado en 2007.

Con estos ingresos, las familias hacen frente a sus gastos más básicos, como la alimentación, el vestido o el mantenimiento de la vivienda. Los datos de la citada encuesta revelan que el peso de los gastos relacionados con la vivienda supone, de media, el 33 % del presupuesto de los hogares españoles (8.964 € anuales). En este sentido, no es de extrañar que la pérdida de capacidad adquisitiva mostrada haya culminado en los 362.776 desahucios que, según un estudio de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca realizado por Colau y Alemany (2013), se han producido entre 2007 y 2012 como efecto del desempleo y la ausencia de ingresos en muchos hogares. En este último año, tan sólo en el primer trimestre del 2014, el Banco de España cifra en 26.549 las viviendas entregadas debido a procesos de ejecución hipotecaria, de las cuales 19.565 eran viviendas habituales. Si bien ha habido un retroceso del 24 % con respecto al mismo periodo de 2013 en el número de entregas de viviendas (de 35.098 a 26.549), no deja de ser alarmante que casi 20.000 familias hayan perdido su vivienda habitual en el primer semestre de 2014.

Los desahucios son la culminación más extrema y dramática de las situaciones de dificultad prolongada. El elevado peso que los gastos en residencia suponen para los presupuestos de las familias y la falta de apoyos, bien de carácter público –a través de ayudas de emergencia o servicios de intermediación hipotecaria que prevengan la pérdida de la vivienda–, o bien de carácter informal –porque las redes de apoyo no tienen capacidad de rescatar a los hogares endeudados–, ponen en riesgo la garantía de una vivienda en estas familias. Como resultado, la última Encuesta a Personas sin Hogar, realizada por el INE, cifra en 22.938 el número de personas sin hogar en 2012; y de ellas, el 45 % perdió la residencia a causa del desempleo, y el 20,9 %, tras la separación de su pareja. Por tanto, la exclusión residencial está estrechamente asociada a las dificultades económicas, la conflictividad familiar o, como se verá posteriormente, a otras problemáticas de salud, adicción e incluso al suicidio.

Por tanto, las dificultades económicas prolongadas son habitualmente el motor de itinerarios de exclusión social definidos a partir de una concatenación de efectos que ya era identificada en el primer impacto de la crisis en Lasheras *et al.* (2012). Entre algunos de estos ejemplos de acumulación de dificultades en algunos hogares, destacaba cómo a consecuencia del desempleo prolongado numerosas personas sufrieron depresión, redujeron su variedad alimentaria, aumentaron de peso, disminuyeron su salud física, pidieron moratorias de pagos en las entidades financieras, y por tanto, aumentó su deuda, e incluso se aislaron al perder relaciones sociales por tener que reducir drásticamente su gasto en ocio. Todos estos costes acumulados, por un lado, sitúan al hogar en escenarios de alta dificultad, y por otro, le restan capacidad para resistir, enfrentar y prevenir futuros procesos de exclusión.

Carbonero (1997) señala que el hogar es el principal agente redistribuidor de la renta y del cuidado, por



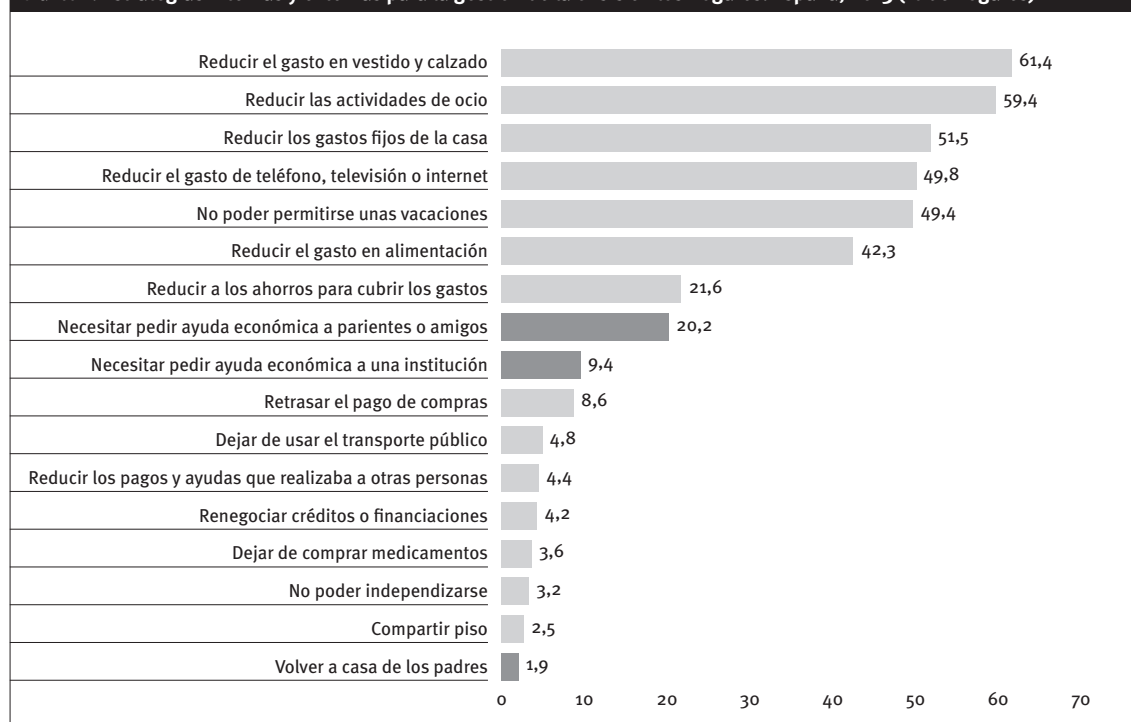
lo que es el lugar donde se diseñan las estrategias para enfrentar la crisis. En momentos de dificultad, la búsqueda de alternativas persigue mantener las condiciones de vida de estas familias, contrarrestar las situaciones de necesidad y prevenir o evitar la caída en situaciones de exclusión. Las estrategias son una respuesta a las necesidades de los hogares, pero su desarrollo estará determinado, por un lado, por la intensidad de las necesidades, y por otro, por la posibilidad de contar con recursos para desarrollarlas, tanto internos al hogar como de redes de apoyo externo. Es decir, la capacidad de generar estrategias se debe tanto a las necesidades de los hogares como a las oportunidades que tienen para desarrollar alternativas. Estas oportunidades responden, internamente, a las capacidades que sus miembros tienen para buscar estrategias en ellos mismos y que competen, de forma exclusiva, a decisiones internas al hogar. Por otro lado, las situaciones de necesidad más extremas requerirán el apoyo y la ayuda de otras personas, servicios o políticas de protección social, y con ello, serán acciones que dependerán de la capacidad de ayuda o decisión de personas ajenas al hogar necesitado.

En esta línea, Laparra y Pérez (2011) identificaban como 'estrategias internas' aquellas medidas de ajuste y optimización de los gastos en materia de alimentación, ropa o calzado, gastos fijos del hogar, otros gastos –como teléfono, televisión o internet–, y, por último, la limitación del gasto destinado a ocio y tiempo libre. Por otro lado, denominaban como 'estrategias externas' aquellas que requerían del apoyo de otras personas o agentes, bien de carácter público, como los servicios sociales, o de ámbito

más privado, como las ayudas de familiares y amigos/as. Los resultados de dicho estudio señalaban que la puesta en marcha de estas últimas se vinculaba a los hogares con mayores necesidades, debido a que son reflejo de la incapacidad de responder a la crisis solamente con medidas internas de ajuste presupuestario.

A partir de esta misma clasificación, el Gráfico 2 muestra las estrategias que los hogares han manifestado desarrollar en 2013. Las estrategias de ajuste y optimización del gasto son las más desarrolladas, debido a que seis de cada diez hogares han tenido que reducir los gastos en vestido, calzado y actividades de ocio tras la pérdida de ingresos. Asimismo, cinco que cada diez han limitado los gastos fijos de la casa, teléfono, televisión o internet, y no pueden disfrutar de una semana al año de vacaciones en familia. Igualmente es alarmante que casi la mitad de los hogares (42,3 %) hayan reducido la cesta de la compra, un hecho que probablemente tenga importantes consecuencias en el estado de salud del hogar, debido a que, por ello, podrían darse privaciones básicas que, en su carácter más extremo, se señalan como pasar hambre, una realidad manifestada por el 3,9 % del total de hogares en 2013. El aumento de las privaciones básicas en las familias tiene consecuencias directas para la salud del hogar, pero es especialmente grave la situación de los menores. Como efecto de una peor alimentación y de la insalubridad, el informe del Centro Nacional de Epidemiología (2014) alerta de una incidencia importante de las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, la cual afectó en 2012 al 6,3 % de los menores de 15 años.

**Gráfico 2. Estrategias internas y externas para la gestión de la crisis en los hogares. España, 2013 (% de hogares)**



Fuente: EINSFF (2013).

Otros datos reseñables, aunque manifestados por un menor número de núcleos, son que el 21,6 % de los hogares ha recurrido a sus ahorros para enfrentar dificultades, que el 8,6 % ha dejado de pagar las compras a plazo y que el 4 % ha dejado de usar el transporte público, ha renegociado créditos o financiaciones o ha dejado de comprar medicamentos por motivos económicos. Todo ello, sin duda, redundará en una pérdida de bienestar (movilidad, sanidad) de los hogares.

Además de las acciones de ajuste de gasto y optimización de los recursos financieros, los resultados de la encuesta muestran el desarrollo de otras alternativas, como reducir los pagos y ayudas que el hogar realizaba a otras personas, no independizarse o decidir compartir piso con personas sin vínculo de parentesco. Estas acciones han sido detectadas en un 4,4 %, 3,2 % y 2,5 % del total de hogares, respectivamente; y si bien son decisiones que se toman como efecto del aumento de las necesidades, en relación con la primera de ellas, son también una evidencia de que otros núcleos cercanos que recibían ayuda van a dejar de hacerlo. Igualmente, se pueden identificar dos estrategias de carácter externo, la necesidad de pedir ayuda económica y la posibilidad de volver al hogar de origen, que se implementan por la necesidad de compensar las situaciones de necesidad económica y residencial de muchas familias.

En primer lugar, destaca que un 20 % de los hogares han tenido que pedir ayuda económica a familiares o amigos, y que el 9,4 % lo ha hecho a las instituciones. Es decir, tres de cada diez hogares han tenido que pedir ayuda a familiares, amigos o instituciones sociales. En segundo lugar, se observa que la crisis ha provocado el retorno de un 2 % de la muestra a casa de sus padres. Esta decisión requiere ser aprobada por el hogar que acoge y, si se atienden a otros análisis anteriores, como Martínez Virto (2014b), puede tener importantes efectos en la dinámica del nuevo hogar constituido. Por tanto, a pesar de no ser una estrategia muy habitual, su desarrollo entraña importantes implicaciones tanto para el núcleo familiar que acoge como para el acogido.

En definitiva, el mapa de estrategias presentado evidencia las diferentes alternativas que los hogares están desarrollando para enfrentar la crisis. Su puesta en marcha busca contrarrestar las dificultades y su uso puede estar dándose no de manera excluyente, sino de forma paralela, tal y como se constató en trabajos anteriores, como Lasheras *et al.* (2012). Sin embargo, hay un elemento determinante en el desarrollo de un tipo u otro, y es la autonomía de los hogares y la posibilidad de contar con apoyos.

## 6. Ante el aumento de las dificultades, nuevos modelos de convivencia

El elevado peso que los gastos de la vivienda suponen respecto al total de los ingresos de los hogares es, sin duda, un indicador clave que permite intuir

uno de los mayores riesgos de muchos hogares actualmente: la exclusión residencial. Los desahucios, los impagos de gastos de suministro o los elevados alquileres o hipotecas están entre las dificultades más angustiosas de muchas familias. Como consecuencia, los modelos de convivencia se han podido ver alterados. La Encuesta Continua de Hogares del INE (2013) señala que el número de hogares aumenta progresivamente en España (actualmente hay 18.217.300). Ello se explica por el incremento del número de hogares de personas que viven solas, que alcanza ya al 24,2 % del total (4.414.000), así como por una progresiva reducción del tamaño de los hogares (2,53 personas, de media, por hogar). Sin embargo, si bien los datos señalan que, en términos generales, la tendencia en España se dirige hacia el aumento del número de hogares y el descenso de su tamaño, las dificultades económicas en la crisis podrían estar modificando, en algunos de ellos, estas dinámicas de convivencia, empujando hacia la constitución de hogares en los que viven, de nuevo, diferentes generaciones.

A partir de la explotación de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación Foessa (EINSFF), y con el apoyo de otras fuentes de ámbito estatal, se identifican cuatro modelos de convivencia en la crisis: el mantenimiento de convivencias no deseadas; las múltiples convivencias, con o sin parentesco, en un mismo domicilio; la presencia, en los hogares de origen, de jóvenes retornados o no emancipados; y la convivencia con personas pensionistas. A continuación se exponen estos modelos.

### 6.1. Convivencias no deseadas: se reduce el número de divorcios y separaciones

Las estadísticas anuales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística constatan que el número de divorcios y separaciones se ha reducido en España en los últimos años. Según esta fuente, el número de separaciones en 2012 se había reducido a la mitad con respecto a 2007, año en que se contabilizaron 11.583, mientras que la cifra de 2012 apenas alcanzó los 6.369. En relación con los divorcios, la reducción fue menor; aun así, se contabilizaron más de 20.000 menos (de 125.77 en 2007 a 104.262 en 2012). La Encuesta Foessa también constata un punto porcentual menos en el número de hogares que han vivido situaciones de divorcio o separación en los últimos 5 años: según los datos, estas situaciones han pasado de darse en el 8,2 % de los hogares en 2009 a hacerlo en el 7,1 % en 2013.

Las rupturas no son solamente caras por los procesos judiciales a los que se debe hacer frente, sino porque conllevan, además, la disgregación de un hogar en dos, y por tanto, asumir doblemente los gastos vinculados a la vivienda. Por ello, los elevados costes derivados de los procesos de separación o divorcio podrían explicar la reducción de su tasa. No obstante, esta decisión de mantener convivencias o relaciones no deseadas por motivos económicos podría tener

importantes efectos en el clima de convivencia de un hogar, contribuyendo a incrementar la tensión y relaciones conflictivas entre sus miembros.

## 6.2. Convivencias múltiples en un mismo domicilio

La necesidad de reducir (o compartir) los gastos en vivienda y de prevenir impagos en el alquiler, la hipoteca e incluso en los gastos de suministro (agua, luz, gas) ha aumentado las formas de convivencia alternativas –no tan habituales en la sociedad española, debido al arraigo de las dinámicas familistas–, constituidas sin la obligatoriedad del lazo de parentesco. Las dos alternativas detectadas en la Encuesta Foessa son subalquilar habitaciones o compartir piso con otras personas o familias.

Por un lado, el subalquiler de habitaciones es manifestado por casi un 2 % de los hogares encuestados. Su desarrollo no se ha incrementado con respecto a 2009, pero casi nueve de cada diez hogares que lo señalan se encuentran en situaciones de precariedad o exclusión (40 % de los hogares precarios); por tanto, cabría pensar que es una estrategia vinculada a aquellos hogares que adquirieron una vivienda en épocas de bonanza y que actualmente encuentran dificultades para pagar la hipoteca mensualmente.

Por otro lado, la fórmula del piso compartido con otras personas, o familias completas, sin lazo de parentesco es señalada por el 2,5 % de los hogares en 2013, un porcentaje que se incrementa ligeramente con respecto a 2009. El mayor aumento de esta alternativa convivencial se constata en los hogares en exclusión severa, donde entre 2007 y 2009 el porcentaje se duplica (de 0,4 % a 0,8 %). Esta alternativa estaría más vinculada a hogares con mayores dificultades económicas, que tradicionalmente han vivido en alquiler.

Al igual que se mencionaba en el caso anterior, a pesar de que las alternativas residenciales más económicas compensan el elevado coste de la vivienda y previenen su pérdida, su desarrollo no está exento de efectos no deseados. En estos casos, la falta de espacios e intimidad podrían ser algunas de las consecuencias más graves en estos hogares donde conviven múltiples personas o familias.

## 6.3. Jóvenes en casa: retraso de emancipaciones o retornos

El tercero de los modelos de convivencia detectado en el marco de la crisis es aquel donde los jóvenes, por razones económicas, han tenido que retrasar emancipaciones o retornar forzosamente a casa de sus padres y madres. Según el último informe del Observatorio de Emancipación, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (2014), el número de personas jóvenes emancipadas menores de 30 años en España desciende desde 2011. Actualmente sólo un 22,3 % de las personas de 16 a 29 años residen en

una vivienda independiente de su hogar de origen, es decir, menos de uno de cada cinco jóvenes menores de 30 años están emancipados. Esta proporción de no emancipación es todavía más acuciante si se atiende a las personas de entre 16 y 24 años. En este caso, más de 9 de cada 10 continúan viviendo en el hogar familiar (tasa de emancipación del 7,2 %). En España, los procesos de emancipación se desarrollan habitualmente a partir de los 30 años, por lo que en el tramo de edad de 30 a 34 años más de 7 de cada 10 jóvenes viven fuera de casa de sus padres (Observatorio de Emancipación, 2014). Sin embargo, la crisis económica y la falta de oportunidades laborales podrían haber obligado a muchos de estos jóvenes recientemente emancipados a volver a casa.

La Encuesta Foessa señala que, como efecto de la crisis económica, el 2,2 % de las personas entrevistadas en 2013 habían regresado al hogar de sus padres, y que 4,1 % no habían podido independizarse. En términos absolutos, estos porcentajes representan un total de 523 personas de la muestra que han tenido que regresar a casa de sus padres y 963 casos que no han podido emanciparse. De estas personas, seis de cada diez son menores de 44 años (61,2 % y 60,1 % de quienes han vuelto a casa o no han podido emanciparse, respectivamente). Estos resultados van en la línea de los obtenidos en el último Barómetro de la Familia (The Family Watch, 2014), donde se constata que una de cada cinco familias de la muestra (600 encuestas) tiene hijos mayores de 25 años dependientes económicamente del hogar, así como que una de cada diez familias ha visto a uno de sus miembros volver al hogar después de un proceso de emancipación.

Estamos ante un fenómeno social de gran impacto, sobre todo si se observa con una perspectiva comparada. En Laparra y Pérez (2012), a partir de los datos de las Estadísticas Comunitarias sobre la Renta y las Condiciones de Vida (EU-SILC, Eurostat), se observaba cómo el 36,5 % de los jóvenes españoles de 25 a 34 años vivían con sus padres, mientras que en países como Reino Unido, Francia o Dinamarca, el porcentaje de jóvenes de entre 25 y 34 que vivían con sus padres era del 16,6 %, el 12,2 % y el 1,3 % respectivamente. Pero si bien la tradición familista que caracteriza a España podría explicar parte de este porcentaje, estudios recientes, como Moreno Mínguez (2012), Ballesteros, Megías y Rodríguez (2012), o Gentile (2010), señalan que estas trayectorias de emancipación vienen marcadas por el ciclo económico y motivadas por la falta de oportunidades laborales de los jóvenes.

Del mismo modo, el regreso al hogar de origen, o la no emancipación, motivadas por factores ajenos, forzados e imprevistos, como el desempleo, no estarían exentas de costes personales ni familiares. Es lo que Walther y Stauber (2002) denominan ‘trayectorias fallidas’, debido a que son decisiones que conllevan una importante frustración, pérdida de autoestima o autonomía, al haber tenido que abortar procesos de emancipación.



#### 6.4. Las personas pensionistas, uno de los frenos de la crisis

Ante la creciente inseguridad del empleo y la inestabilidad económica de muchos hogares, los ingresos estables que provienen de una pensión, aunque sean de escasa cuantía, conceden cierta estabilidad económica y seguridad al hogar. Ello podría explicar el aumento de hogares en los que se convive una persona con pensión. Este hecho se refleja tanto en la Encuesta Foessa como en la Encuesta estatal y anual de Presupuestos Familiares. Según la Encuesta Foessa, el número de hogares en España donde habría una persona mayor conviviendo se ha incrementado en 3 puntos porcentuales entre los años 2007 y 2013 (del 31 % al 34,8 %); asimismo, la Encuesta de Presupuestos Familiares constata que aumentan en un punto porcentual los hogares sustentados por personas de 65 o más años (27,28 % del total de hogares en 2012), mientras que se reducen los de entre 16 y 29 años (4,96 % en 2012). Esta fuente señala también que el 33,75 % de los hogares que tienen como fuente principal de ingresos las pensiones contributivas y no contributivas (jubilación, invalidez, viudedad) aumenta en 2 puntos porcentuales.

Otro indicador cardinal que permite identificar la capacidad que las pensiones tienen de compensar las dificultades económicas y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de muchos familiares es el que cuantifica, en la Encuesta de Presupuestos Familiares, los niveles de gasto medio de los hogares en relación con las características de la persona sustentadora principal. Este indicador muestra que se reduce el gasto medio en todos los tipos de hogares, excepto en aquellos en los que la persona principal tiene más de 64 años, donde aumenta en casi 2.000 € (de 21.437,19 € en 2007 a 23.235,57 € en 2013). Por ello, cabría pensar que, si bien la capacidad adquisitiva de los hogares con pensionistas no se ha visto tan reducida durante la crisis como la de aquellos que dependen de asalariados, el aumento del gasto en los primeros podría deberse tanto al apoyo económico a familiares cercanos a través de la compra de alimentos, por ejemplo, como a un incremento del número de miembros que viven, o comen, en casa del pensionista, de tal forma que los niveles de consumo se ven incrementados.

Con estos modelos de convivencia compuesta donde conviven padres/madres, hijos/as o abuelos/as, no sólo se busca garantizar un ingreso mensual estable para el hogar, sino que otra de las motivaciones de esta estrategia podría ser la de optimizar los recursos familiares. La combinación de algunas de estas estrategias de convivencia podrían dar lugar a un modelo de convivencia trigeracional en que los/las jóvenes no se emancipan (o retornan) y los abuelos/as viven en casa.

La apuesta por la solidaridad familiar intergeneracional en momentos de dificultad económica y desempleo fue uno de los resultados que Gallie y Paugam

(2000) identificaron en países como España. A través de un análisis en profundidad sobre la posible asociación entre el nivel de protección de las prestaciones de desempleo (cuantía, cobertura y duración de la prestación, y recursos de activación) y el apoyo de las familias, constataron que en España era la solidaridad familiar la que conseguía frenar las bolsas de pobreza ante una protección del desempleo limitada. Esta conclusión se refleja en Laparra y Pérez (2012), donde el número de personas mayores de 65 años en los hogares con todos los miembros activos en paro en España se duplicó entre 2007 y 2010 (del 4,1 % al 7,8 %), mientras que ese porcentaje era seis veces menor (1,6 %) en Francia, y casi 10 veces menor (0,8 %) en Reino Unido y Dinamarca.

En esta línea, en España, la significación de las pensiones es especialmente relevante cuando la incidencia del desempleo en los hogares es mayor. Como puede constatare en la Tabla 2, para los hogares en exclusión severa en los que todos los miembros activos están en paro, la presencia de un pensionista supone una reducción de la tasa de exclusión del 60 % respecto a los hogares en los que no hay pensiones. Además, el Índice Sintético de Exclusión Social<sup>2</sup> en los hogares con todos los miembros activos en paro y sin presencia de pensionistas se multiplica por dos (5,019).

**Tabla 2. Niveles de integración social de los hogares afectados por el paro y de los que tienen todos los miembros activos en paro, según presencia de algún pensionista en el hogar. España, 2013 (% de hogares)**

| Nivel de integración                 | Hogares con algún parado |                 | Hogares con todos los miembros activos en paro |                 |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|--|-----------------|
|                                      | Sin pensionista          | Con pensionista | Sin pensionista                                | Con pensionista |
| Integrado                            | 4,9                      | 1,4             | 0,0  | 0,0             |
| Integración precaria                 | 49,4                     | 62,1            | 20,9   | 56,3            |
| Exclusión moderada                   | 25,1                     | 22,2            | 30,8   | 24,3            |
| Exclusión severa                     | 20,5                     | 14,3            | 48,3   | 19,5            |
| Total tasa de exclusión              | 45,7                     | 36,5            | 79,1   | 43,7            |
| Índice Sintético de Exclusión Social | 2,532                    | 2,281           | 5,019  | 2,761           |

Fuente: EINSFF (2013).

A pesar de este apoyo, que sin duda ayuda a compensar las numerosas dificultades cotidianas que enfrentan, el modelo que se configura en estos núcleos está

<sup>2</sup> El Índice Sintético de Exclusión Social se construye a partir de una media de los 35 indicadores de exclusión identificados en la encuesta. El valor o equivaldría al ideal, es decir, a aquellos hogares que no están afectados por ningún indicador. Cuanto más alto es este número, mayor es la incidencia del indicador al que se refiere con respecto a la situación de exclusión social a la que se enfrenta el hogar.

fuertemente marcado por la precariedad derivada de compartir unos recursos escasos. En relación con ello, los resultados constatan que casi dos tercios de los hogares afectados por el desempleo que cuentan con una pensión se encuentran en situaciones de integración precaria (56,3 %). Esta idea subraya, de nuevo, que el desarrollo de estas estrategias y alternativas de convivencia no está exento de costes, y llega incluso a mermar, en situaciones de necesidad prolongada, la convivencia en estos núcleos.

## 7. Los costes de las estrategias sobrecargan a las familias y restan capacidad de ayuda

Se viene adelantando a lo largo del texto que el desarrollo de estrategias, si bien contribuye a prevenir y contrarrestar las dificultades de los hogares en la crisis, no está exento de costes. Trabajos empíricos anteriores de corte cualitativo comenzaban a alertar de que la prolongación de las dificultades podría contribuir a la sobrecarga de las familias (Lasheras y Martínez-Virto, 2013). Las razones que estos trabajos subrayaban venían especialmente definidas por la pérdida de capacidad para encontrar apoyos debido a que el desempleo acoge también a otros familiares; a la necesidad de que, con una misma pensión, haya que ayudar a varios núcleos; a que el apoyo no sea puntual, sino que se prolongue; y, finalmente, al agotamiento de algunos de los recursos en los que al inicio se apoyaban los hogares.

La Encuesta Foessa subrayaba que tres de cada cuatro hogares en 2013 manifestaban contar con ayuda en momentos de necesidad. Con respecto a la evolución de estos apoyos, no se observa un deterioro importante de la capacidad de recibir ayuda entre 2007 y 2013, pero sí una tendencia a la baja. De hecho, los porcentajes sobre el total de hogares que tienen, o han tenido alguna vez, ayuda se reducen en 0,4 puntos (del 75,5 % al 75,1 %). Por tanto, a pesar de que tres cuartas partes de los hogares cuentan con ayuda –una evidencia de que la cobertura y solidaridad informal continúan muy activas– tanto en 2007 como en 2013 la encuesta ya muestra una ligera tendencia a la baja, constatada en el aumento del 24,5 % al 24,9 % de los hogares que no tienen ayuda cuando la necesitan (+0,4 %).

Las causas de ello, además de la previsible sobrecarga de los hogares que ayudaban –por las razones anteriormente señaladas–, son la extensión e intensificación de las necesidades de los hogares y las consecuencias de algunas fórmulas de contrarresto de la crisis. Todo ello podría estar reduciendo el colchón familiar.

### 7.1. Pérdida progresiva de la tasa de cobertura de las pensiones

En el punto anterior, se observa que el impacto de una pensión es notablemente mayor en los hogares con todas las personas activas desempleadas. Según

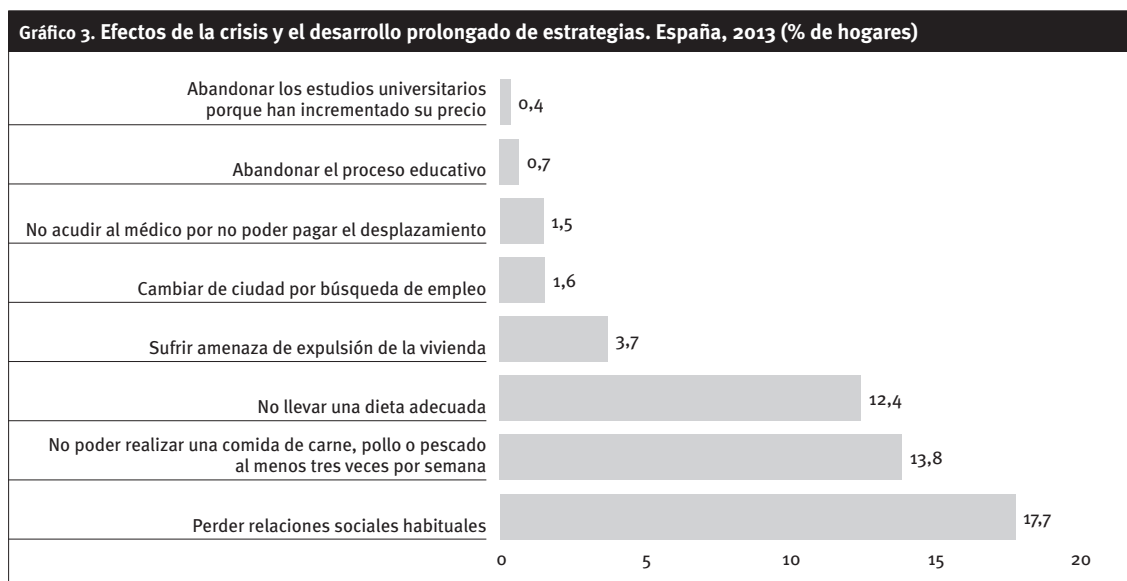
estimaciones realizadas a partir de los hogares con desempleo total familiar de la Encuesta de Población Activa (segundo trimestre, 2013) y la presencia de pensiones según la Encuesta Foessa (2013), el 36,7 % de estos hogares en desempleo total familiar cuentan con un pensionista, lo que representa 664.000 hogares. Sin embargo, a pesar de su relevancia, esta proporción se ha visto reducida en 2 puntos porcentuales con respecto a los datos de 2009 (38,8 %). Por tanto, de este dato se puede subrayar que en 2013 hay más hogares con todas las personas activas en paro que no cuentan con el importante recurso de tener a un pensionista en casa. Sin embargo, debe seguir subrayándose que las pensiones son un factor de protección para casi 1,2 millones de hogares en España, y asimismo, permiten una reducción de 9 puntos porcentuales de la tasa de exclusión social (más de 6 en la exclusión severa).

En definitiva, estos datos señalan que, en la primera fase de la crisis, las pensiones tenían cierta capacidad de apoyar, como última red, a casi un millón de hogares en 2009, debido a que la presencia de pensionistas en hogares afectados por desempleo se multiplicó por cuatro. Sin embargo, el espectacular aumento de los hogares con algún desempleado no ha traído consigo un aumento similar de la presencia de pensionistas en estos núcleos, por lo que la ‘tasa de cobertura’ de las pensiones sobre el desempleo familiar ha disminuido y, actualmente, poco más de uno de cada cinco hogares afectados por el desempleo cuenta con este recurso (22,2 %) [Lorenzo Gilsanz, 2014].

### 7.2. La salud física y mental de los hogares empeora: aumento de trastornos mentales, adicciones y suicidios

Las estrategias que los hogares han desarrollado para tratar de minimizar el impacto de la pérdida de ingresos, prevenir privaciones o garantizar –aunque de manera más precaria– las necesidades básicas y residenciales de sus hogares han sido diversas, tal y como se ha comprobado anteriormente. Entre las más comunes, se identificaba el ajuste en la compra de alimentos o en ocio; sin embargo, también se observaba que en los casos de mayor necesidad era necesario recurrir a apoyos externos, tanto de familiares o redes sociales como de instituciones. La extensión de las dificultades de estos hogares, en tiempo e intensidad, ha hecho que todas estas estrategias se prolonguen más de lo esperado, lo que ha dado lugar a efectos perversos que restan autonomía a los hogares y pueden sobrecargar a sus tradicionales apoyos.

Uno de los efectos más intensos del ajuste de la cesta de la compra o del presupuesto destinado al ocio ha sido el grave empeoramiento de la alimentación y de las relaciones sociales de las familias. Como se constata en el Gráfico 3, un 17,7 % de los hogares señalan haber perdido sus relaciones sociales habituales como efecto de la crisis; un 13,8 %, no poder realizar una comida de carne, pollo o pescado al menos tres veces por semana; y un 12,4 % manifiesta llevar una dieta inadecuada.



Fuente: EINSFF (2013).

En el primero de los casos, la pérdida de relaciones sociales ha sido efecto de estrategias como la reducción del gasto en ocio, el cambio de ciudad por búsqueda de empleo o los cambios de domicilio o barrio tras las amenazas de ser expulsados de la vivienda, entre otras razones. Todo ello aumenta el riesgo de vivir situaciones de aislamiento social en estos hogares, y por tanto, los hace más vulnerables al desarrollo de rápidos itinerarios de exclusión. Por otro lado, la mala alimentación empeorará, sin duda, la calidad de vida y el estado de salud de los miembros del hogar. Este hecho además podría verse agravado si estos hogares no acuden al médico por no poder asumir los pagos del desplazamiento, conducta manifestada por el 1,5 % de los hogares.

Igualmente, estos resultados muestran que la insuficiencia económica y el ajuste de gasto han hecho que un 1,1 % de los hogares españoles abandonen el proceso educativo o los estudios universitarios de alguno de sus miembros por razones económicas. La pérdida de nivel formativo en los hogares con dificultades es un importante riesgo para su capacidad futura de desarrollar itinerarios de inclusión. Por tanto, son alternativas que, si bien pueden evitar algunas situaciones de privación económica, constituyen a largo plazo estrategias de reproducción social de la pobreza (Gutiérrez, 2005).

La acumulación de todos estos factores concatenados, así como la escasa capacidad económica de los hogares, ha podido mermar, además, de la salud física de estas personas, su estado mental. Numerosos estudios han investigado la asociación entre las dificultades económicas y los trastornos relacionados con el estado de ánimo, la ansiedad, el alcohol y los trastornos alimentarios. Por tanto, sería previsible encontrar un aumento de trastornos mentales, situaciones de estrés, adicciones o depresión en los hogares, lo que incrementaría el riesgo de vivir situaciones de conflicto social, tanto externo como interno al hogar.

En esta línea, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Cortès-Franch y González López-Valcárcel, 2014) ha publicado recientemente el informe *Crisis económica y salud*, en el que se señala un aumento del 19,4 % de las depresiones en España entre 2006 y 2010. Este hecho también se encuentra estrechamente relacionado con un incremento del 4 % del consumo de psicofármacos entre 2009 y 2012. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud (2014) subraya que no sólo las personas adultas están en riesgo de padecer trastornos mentales: en su último análisis sobre la salud de los adolescentes, alerta de que la depresión es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 19 años. Similares conclusiones se revelan también en Gili *et al.* (2013), donde, además de los riesgos asociados al desempleo, se identifica un riesgo elevado de depresión asociada con las dificultades del pago de la hipoteca y los desahucios. Sus resultados estiman que alrededor de un tercio de la población atendida con trastornos de salud mental podría estar vinculada a dificultades de desempleo y pago de la hipoteca. Esta asociación también se demuestra en la Encuesta de Personas sin Hogar (2012), donde el 44,1 % de las personas sin hogar tenían alcoholismo y el 55 % estaban en desempleo de larga duración, porque llevaban buscando trabajo entre uno y tres años (38 %) o más de tres años (17 %). Por tanto, análisis como éstos constatan que durante la crisis ha aumentado significativamente la frecuencia de los trastornos de salud mental y el abuso de sustancias como el alcohol, lo cual ha incrementado el número de atenciones médicas por estas cuestiones, especialmente, en las familias que experimentan dificultades de desempleo y pagos de la hipoteca (Gili *et al.*, 2013).

La Encuesta Foessa también constata, entre 2009 y 2013, un aumento del 8,2 % al 10,6 % de los hogares que han vivido en los últimos cinco años alguna enfermedad o trastorno mental. En 2013, cuatro de cada diez de estos hogares estaban en una situación

de precariedad, y casi otros cuatro, en exclusión social. Un libro verde de la Comisión de las Comunidades Europeas alertaba 2005 sobre la vulnerabilidad de los hogares con dificultades frente a estos episodios, al señalar que las clases sociales más bajas son especialmente vulnerables a las enfermedades mentales, siendo esto una consecuencia directa de las dificultades económicas y sociales a las que se enfrentan.

El fuerte vínculo entre el desempleo y haber sufrido enfermedades mentales o adicciones se constata en la Tabla 3. Entre los hogares con todos los miembros activos en paro, casi dos de cada diez señalan que alguno de ellos padece enfermedad o trastorno mental, porcentaje que se reduce a la mitad en los hogares con algún miembro en desempleo. Es decir, las enfermedades mentales tienen más del doble de incidencia en los hogares con todos los miembros activos en paro que en aquellos donde algún miembro está parado. Por otro lado, si bien el juego y el consumo de drogas o alcohol tan sólo es señalado por un 2,4 % del total de los hogares de la muestra de 2013, su presencia se incrementa por cinco en los hogares donde hay algún miembro en paro (10,7 %), y por diez en aquellos con todos los miembros activos en paro (23,8 %). Estos datos corroboran que las dificultades económicas y la pérdida del empleo tienen un efecto importante en el inicio de adicciones o en sufrir enfermedades mentales. Por tanto, en los hogares donde se dan ambas circunstancias, la capacidad de subsistencia del núcleo, el clima de convivencia y la reinserción laboral de los miembros activos en paro se alejan de un diagnóstico optimista.

Los trastornos mentales y las adicciones no tratadas generarán situaciones de muy difícil reinserción, más aún en un contexto laboral hostil, donde la falta de oportunidades laborales y el progresivo agotamiento de las prestaciones aumentan el pesimismo, la depresión o el estrés en los hogares. Todos estos efectos del desempleo prolongado alejan a estos hogares de una reincorporación inmediata (Fernández Maillo *et al.*, 2014; Martínez Virto *et al.*, 2013). Por tanto, entre las políticas de lucha contra la exclusión social también se debe garantizar la atención psicológica, y así lo señaló la OMS en 2010 con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

Esta organización denunciaba entonces la falta de recursos para tratar estos trastornos y estimaba que entre un 75-85 % de los casos graves de salud mental en los países de ingresos medios no recibían tratamiento. Dicha realidad podría ser más grave cuatro años después, debido al constatado vínculo entre las dificultades económicas y de desempleo con las enfermedades mentales.

La cara más extrema de la prolongación de estas realidades son los suicidios. Sirvent (2013) señala, precisamente, que las tres causas fundamentales del suicidio son los problemas económicos, los problemas de pareja y los problemas familiares. El INE (2014) cifra el aumento de los fallecimientos por suicidios en un 11,3 % con respecto a 2011, un valor que ha alcanzado su tasa más alta desde 2005. De esta cifra, el 77 % son varones, y el 23 %, mujeres. Este aumento también queda constatado en la Encuesta Foessa (2013), donde, con respecto a los datos de 2009, aumenta la incidencia del número de hogares que en los últimos cinco años manifiestan haber vivido en su familia suicidios o intentos de suicidio (del 0,3 % al 0,4 %). De estos hogares, el 83,4 % están en exclusión moderada o severa, un peso que en 2009 era del 66,6 %. Por tanto, el incremento de los suicidios entre 2009 y 2013 se produce, principalmente, por un incremento del suicidio en los hogares en exclusión, donde se duplica.

### 7.3. Los costes de las convivencias no deseadas: aumenta la conflictividad en las familias

Por último, el desarrollo de nuevos modelos de convivencia impulsados de manera forzosa por las dificultades económicas, el elevado peso que la vivienda supone para los presupuestos familiares o el aborto de procesos de autonomía tienen, sin lugar a dudas, consecuencias importantes de corte relacional. Todos los modelos de convivencia observados en el apartado anterior tenían un denominador común: implicaban compartir residencia o convivir con otras personas de manera no deseada. En estudios anteriores, como Martínez Virto (2014b), se identificó que, desde los primeros años de la crisis, alternativas residenciales como cambiar de domicilio, ser reagrupado por núcleos cercanos o compartir una vivienda suponían, además de una importante reducción de

Tabla 3. Hogares que han sufrido en los últimos años enfermedad mental o adicciones: total y distribución según la situación de desempleo del hogar. España, 2009 y 2013 (%)

|  | 2009          |  |  | 2013          |  |  |
|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
|  | Total muestra | Hogares cuyo sustentador está en paro desde hace al menos un año | Hogares con todos los miembros activos en paro | Total muestra | Hogares cuyo sustentador está en paro desde hace al menos un año | Hogares con todos los miembros activos en paro |
| Hogares que han sufrido enfermedad mental o trastorno en los últimos cinco años                | 8,2           | 8,5  | 19,5   | 10,6          | 8,8  | 17,1   |
| Hogares con personas con problemas de alcohol, drogas o juego en los últimos cinco o diez años | 3,9           | 12,8   | 25,0   | 2,4           | 10,7   | 23,8   |

Fuente: EINSFF (2009 y 2013).

espacio de la vivienda, una sobrecarga económica reseñable para el hogar que acoge, una importante pérdida de autonomía, la merma de intimidad para el acogido y un mayor aislamiento, por la pérdida de relaciones con el vecindario, si el nuevo domicilio estaba en otra zona residencial.

Todos estos costes se alertaban en apartados y estudios ya señalados, pero se evidencian también en la Encuesta Foessa (2009, 2013), donde se puede comprobar el aumento de la conflictividad de los hogares a partir del número de hogares donde se han producido malos tratos físicos y psicológicos en los últimos años. Según esta fuente, con respecto al total de hogares, se observa un ligero incremento de 0,5 puntos porcentuales de la violencia en el domicilio. Sin embargo, esta incidencia se multiplica por cinco en los hogares con algún miembro desempleado (11,5 %) y por diez en los hogares donde todos los miembros activos están en paro (22,5 %). Al igual que ocurría en el caso anterior, con respecto a 2009, la incidencia de la violencia se reduce en aquellos hogares afectados de alguna manera por el desempleo. No obstante, es importante subrayar que está presente en más de uno de cada diez hogares con algún miembro en paro y en casi 2,5 de los que tienen desempleo total familiar.

En el caso de los jóvenes, el retorno al hogar de origen o el forzoso retraso de los procesos de autonomía suponen una importante pérdida de libertad y un sentimiento de fracaso. Estos sentimientos tienen importantes costes emocionales o psicológicos tanto en las personas acogidas –por un aumento de la tristeza, la baja autoestima o la impotencia de abortar proyectos vitales ya iniciados– como en la familia, en el núcleo que acoge –debido a que ello aumenta los costes económicos derivados del retraso de la emancipación, proceso vital cada vez más largo y costoso que, generalmente, es asumido por la familia de origen. Todas estas realidades y sentimientos pueden ser caldo de cultivo para los conflictos familiares, y un aumento de éstos podría tener consecuencias muy graves, e incluso irreversibles, si la situación de convivencia no deseada se prolongara.

En resumen, pues, las estrategias y las alternativas desarrolladas para enfrentar las dificultades económicas o prevenir la exclusión residencial demuestran tener costes que permiten identificar los primeros síntomas de extenuación de muchas familias. La

sobrecarga de las familias debilita su estructura de apoyo, aminora los climas de convivencia saludables y reduce las relaciones sociales, las cuales son un factor fundamental de integración en España. Por tanto, tras el aumento del desempleo y la precariedad laboral y la reducción de la protección de algunas prestaciones o servicios de atención a las personas, el riesgo de que la solidaridad familiar se debilite alerta sobre el posible aumento exponencial de los hogares sin apoyos y, por tanto, en riesgo de caer en situaciones de alta exclusión.

## 8. Conclusiones

Se comenzaba este artículo subrayando que las redes sociales y familiares gozan de un amplio reconocimiento como agentes de integración y bienestar en España. El vínculo social protege, y aquellos hogares que no lo tienen se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. La literatura académica alerta también del fuerte vínculo que existe entre las situaciones de aislamiento y conflictividad, y el inicio de procesos de exclusión social, especialmente, aquellos relacionados con el mercado de trabajo. En un contexto de alto desempleo, por tanto, cabría pensar en un aumento significativo de las situaciones de aislamiento social.

Si bien es cierto que no se ha producido un destacado aumento de los procesos de exclusión relacional en esta crisis, a pesar de que haya sido ampliamente constatada la relación entre ambos factores, algunos de los resultados que se han expuesto señalan que las redes sociales y familiares están perdiendo capacidad de ayuda, o en otras palabras, que comienzan ya a constatarse los primeros síntomas de agotamiento y sobrecarga de la solidaridad familiar.

La crisis se enfrenta mejor con ayuda, y afortunadamente, tres de cada cuatro hogares en España manifiestan que cuentan con ella en situaciones de necesidad. La importancia de este apoyo, en términos de integración social, le permite una mayor resistencia ante el agotamiento de prestaciones, la falta de oportunidades de reincorporación laboral y la pérdida de la vivienda. Sin embargo, casi el 25 % de los hogares en España señalan no tener ayuda en momentos de necesidad. Las razones de ello pueden deberse tanto a la inexistencia de redes y relaciones de ayuda como a que sus familias no tienen capa-

**Tabla 4. Hogares que han sufrido malos tratos en los últimos cinco o diez años: total y distribución según la situación de desempleo del hogar. España, 2009 y 2013 (%)**

|  | 2009          |  |  | 2013          |  |  |
|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
|  | Total muestra | Hogares cuyo sustentador está en paro desde un año o más | Hogares con todos los miembros activos en paro | Total muestra | Hogares cuyo sustentador está en paro desde un año o más | Hogares con todos los miembros activos en paro |
| Hogares con malos tratos físicos o psicológicos en los últimos cinco o diez años | 2,0           | 18,8   | 29,4   | 2,5           | 11,5   | 22,5   |

Fuente: EINSFF (2009 y 2013).



cidad para ayudar. Ante similares situaciones de dificultad, las posibilidades de resistir a la crisis de estos hogares son significativamente menores que la de aquellos que tienen apoyos.

Las formas de ayuda han sido variadas tanto en tipología como en función (económica, emocional); sin embargo, cabe destacar que una de las conclusiones más relevantes encontradas ha sido la evidencia de que predominan las formas de ayuda recíproca. Es decir, en 2013, más de la mitad de los hogares señalaba que se ayudaba mutuamente, un porcentaje que ha tenido un incremento progresivo desde 2007. No obstante, también es significativo que casi dos de cada diez hogares sólo reciban ayuda y no la ofrezcan, que el 21,3 % ni la den ni la reciban, o que el 8,3 % sean hogares 'benefactores'. La dependencia de ayudas externas está presente en casi uno de cada cuatro hogares excluidos.

En esta línea, por tanto, las maneras de resistir a la crisis también han sido diversas. El mapa observado permite diferenciar dos tipos de estrategias fundamentales: aquellas que pueden desarrollarse de manera interna en el hogar y no dependen de las decisiones o la capacidad de ayuda de otras personas, y aquellas que necesitan apoyos externos. Entre las primeras, destacan los ajustes en la cesta de la compra, señalada por seis de cada diez hogares; sin embargo, cabe destacar que casi tres de cada diez hogares en España dependen de las ayudas económicas de familiares, amistades o instituciones. Este resultado destierra uno de los tradicionales mitos asociados a la exclusión, su pasividad, debido a que actuar ante las dificultades está más vinculado con las oportunidades de encontrar apoyo que con la propia capacidad de resistencia de los hogares. Es decir, que buscar alternativas depende de tener o no tener apoyos, y por ello, contar con ayuda aumenta significativamente las posibilidades de resistir.

Los gastos vinculados a mantener una vivienda equivalen al 33 % de los ingresos medios de los hogares, y la pérdida de la vivienda es uno de los detonantes de procesos de exclusión social más rápidos e intensos. Por tanto, la menor capacidad económica de los hogares para hacer frente a estos gastos y el aumento del riesgo de perder la vivienda han motivado diferentes modelos de convivencia en la crisis. A partir de este análisis, se han identificado cuatro: el mantenimiento de convivencias no deseadas, la múltiple convivencia con o sin lazo de parentesco en un mismo domicilio, el retorno a los hogares de origen o el retraso en la emancipación de los jóvenes, y la convivencia con personas pensionistas.

El mayor potencial de estas formas de convivencia ha sido que han conseguido prevenir muchas situaciones de exclusión residencial. No obstante, el

mantenimiento de estos modelos durante un periodo de tiempo prolongado puede tener grandes costes para estas familias. A partir de la Encuesta Foessa y de recientes estudios, se evidencia un aumento de las situaciones de conflictividad en los hogares afectados por el desempleo, una sobrecarga de las personas pensionistas, el incremento de las situaciones de dependencia familiar, el empeoramiento de la salud por un deterioro de la alimentación o por un aumento de las enfermedades mentales, o adicciones, así como un incremento de los procesos de exclusión residencial que han mantenido o impulsado convivencias no deseadas y que, con carácter extremo, han podido incrementar el índice de muertes o relaciones violentas en los hogares.

Estos primeros síntomas de sobrecarga son indicadores que muestran la pérdida de capacidad de integración de las familias y redes, y a partir de ésta, los itinerarios de exclusión que están desarrollando muchas familias en España. En este sentido, la Encuesta Foessa refleja que entre 2007 y 2013 se ha producido una tendencia descendente en relación con la ayuda que tienen los hogares en momentos de necesidad (-0,4 %). Esta ligera caída no parece deberse a una pérdida del capital social, como se ha visto, sino a que los datos constatan que es la sobrecarga de las familias lo que está debilitando y agotando esa solidaridad.

La pérdida de apoyos familiares no sólo tiene efectos en el modelo de integración del presente, debido a que es lo que marca la velocidad del desarrollo de trayectorias de exclusión, las situaciones de pobreza más intensas o el enquistamiento de los hogares en las situaciones de exclusión severa, sino que el riesgo de que la familia presente síntomas de extenuación contribuye a debilitar la capacidad de protección de ésta a futuro. Por todo ello es necesario diseñar, con carácter urgente, mecanismos de respuesta que permitan construir itinerarios de reincorporación social, garantizar la atención específica de hogares con trastornos mentales o adicciones, así como reforzar las prestaciones de rentas mínimas y ayudas de emergencia social. El objetivo de vigorizar estas políticas es, por un lado, evitar las situaciones de ausencia absoluta de ingresos para aligerar la carga de estos hogares a sus redes y prevenir la pérdida progresiva del capital social de los hogares; y por otro, evitar el agotamiento total de estos apoyos y rescatar de forma urgente a los hogares que no tienen ayuda. De lo contrario, si esta tendencia continúa, se produciría un aumento importante de los hogares sin familia o sin ayuda familiar y, por consiguiente, en un escenario de bajas oportunidades laborales y límites en las políticas de protección, estaríamos ante una sociedad con altos niveles de desigualdad social y pobreza extrema.

- BANCO DE ESPAÑA (2014): *Nota informativa sobre los procesos de ejecución hipotecaria sobre viviendas*, 13 de noviembre [[http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing\\_notes/es/notabe131114.pdf](http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe131114.pdf)].
- BALLESTEROS, J. C.; MEGÍAS, I.; y RODRÍGUEZ, E. (2012): *Jóvenes y emancipación en España*, Madrid, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
- CANTÓ, O. (2010): "El impacto de la crisis económica sobre los hogares más desfavorecidos", *Revista Española del Tercer Sector*, nº 15, [<http://www.fundacionluisvives.org/rets/15/index.html>].
- CARBONERO, M. A. (1997): *Estrategias laborales de las familias en España*, Madrid, Consejo Económico y Social.
- CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA (2013): *Informe epidemiológico sobre la situación de la tuberculosis en España. Año 2012. (Datos a 12-septiembre-2013)* [[http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/TB\\_Informe\\_2012\\_CNE\\_8abril2014.pdf](http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/TB_Informe_2012_CNE_8abril2014.pdf)].
- COLAU, A.; y ALEMANY, A. (2013): *2007-2012. Retrospectiva sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias en España. Estadísticas oficiales e indicadores*, Plataforma de Afectados por la Hipoteca [<http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/02/RETROSPECTIVA-SOBRE-DESAHUCIOS-Y-EJECUCIONES-HIPOTECARIAS-EN-ESPA%C3%91A-COLAUALEMANY1.pdf>].
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2005): *Libro Verde. Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental*. Bruselas, 14.10.2005.
- COM(2005) 484 final, Bruselas, Comisión de las Comunidades Europeas [[http://ec.europa.eu/health/ph\\_determinants/life\\_style/mental/green\\_paper/mental\\_gp\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_es.pdf)].
- CORTÈS-FRANCH, I.; y GONZÁLEZ LÓPEZ-VALCÁRCEL, B. (eds.) (2014): "Informe SESPAS 2014 económica y salud", *Gaceta Sanitaria*, vol. 28, supl. 1, págs. 1-146 [<http://gacetasanitaria.org/es/vol-28-num-s1/suplemento/sespas/S0213911114X0004X/>].
- DURKHEIM, E. (1987) [1893]: *La división del trabajo social*, Madrid, Akal.
- FERNÁNDEZ MAILLO, G. et al. (2014): *¿Qué hacemos contra la pobreza?*, Madrid, Akal.
- GALLIE, D.; y PAUGAM, S. (eds.) (2000): *Regímenes de bienestar y de la experiencia del desempleo en Europa*, Oxford, Oxford University Press.
- GENTILE, A. (2010): "De vuelta al nido en tiempos de crisis. Los boomerang kids españoles", *Revista de Estudios de Juventud*, nº 90, págs. 181-203.
- GILI, M. et al. (2013): "The mental health risks of economic crisis in Spain: Evidence from primary care centres, 2006 and 2010", *European Journal of Public Health*, vol. 23, nº 1, págs. 103-108 [<http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckso35>].
- GUTIÉRREZ, A. (2005): *Pobre, como siempre: estrategias de reproducción social de la pobreza*, Córdoba, Argentina, Ferreyra Editor.
- LAPARRA, M.; y PÉREZ, B. (coords.) (2012): *Crisis y fractura social en Europa: causas y efectos en España*, colección Estudios Sociales, nº 35, Barcelona, Obra Social La Caixa.
- (coords.) (2011): *El primer impacto de la crisis en la cohesión social*, Madrid, Fundación Foessa; Cáritas.

- LAPARRA, M. *et al.* (2007): "Una propuesta de consenso sobre el concepto de exclusión social", *Revista del Tercer Sector*, nº 5.
- LASHERAS, R.; y MARTÍNEZ-VIRTO, L. (2013): "Crisis concatenadas: impactos de la recesión en las condiciones de vida", *Inguruak*, nº 53-54, págs. 682-693.
- LASHERAS, R. *et al.* (2012): "Condiciones de vida, estrategias e itinerarios de exclusión de los hogares en Navarra", en CORERA, C.; LAPARRA, M.; y PÉREZ-ERANSUS, B. (coords.), *Informe sobre el impacto de la crisis en los hogares en situación de exclusión*, en LAPARRA, M.; PÉREZ-ERANSUS, B.; y CORERA, C. (coords.), *Primer informe sobre el desigualdad y exclusión social en navarra*, Centro de Investigación para la Igualdad y la Integración Social, págs. 213-283.
- LORENZO GILSANZ, F. (coord.) (2014): *VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*, Madrid, Fundación FOESSA; Cáritas Española Editores [[http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/descargas/VII\\_INFORME.pdf](http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/descargas/VII_INFORME.pdf)].
- MARTÍNEZ-VIRTO, L. (2014a): *Sobreviviendo a la crisis: estrategias de los hogares en dificultad*, Barcelona, Ediciones Bellaterra.
- MARTÍNEZ VIRTO, L. (2014b): *Crisis en familia. Síntomas de agotamiento de la solidaridad familiar*, serie Documento de Trabajo del VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, nº 3.7, Madrid, Fundación FOESSA; Cáritas Española Editores [[http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos\\_trabajo/15102014151608\\_2582.pdf](http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/15102014151608_2582.pdf)].
- MARTÍNEZ VIRTO, L. *et al.* (2013): "Indicaciones para intervención del trabajo social en situaciones de riesgo y pérdida de vivienda y escala de apoyo para la elaboración del modelo de informe social", en LIMA, A. (coord.): *Trabajo social e intervención en situaciones de riesgo de pérdida de vivienda*, colección Herramientas e Instrumentos del Trabajo Social, Madrid, Consejo General del Trabajo Social.
- MEIL, G. (2011): *Individualización y solidaridad familiar*, colección Estudios Sociales, nº 32, Barcelona, Obra Social La Caixa.
- MORENO, L.; y MARÍ-KLOSE, P. (2013): "Youth, family change and welfare arrangements: Is the South still so different?", *European Societies*, vol. 25, nº 4, págs. 493-513.
- MORENO MÍNGUEZ, A. (coord.) (2012): *La transición de los jóvenes a la vida adulta. Crisis económica y emancipación tardía*, colección Estudios Sociales, nº 34, Barcelona, Obra Social La Caixa.
- OBSERVATORIO DE EMANCIPACIÓN (2014): *Observatorio de Emancipación. España*, Consejo de la Juventud de España, nº 5, primer trimestre [<http://www.cje.org/descargas/cje5574.pdf>].
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2014): *Health for the World's Adolescents* [[http://www.who.int/maternal\\_child\\_adolescent/topics/adolescence/second-decade/en/](http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/second-decade/en/)].
- PAUGAM, S. (1994): *La disqualification sociale: essai sur la nouvelle pauvreté*, París, Presses Universitaires de France.
- SARASA, S.; y MORENO, L. (1995): *El Estado de bienestar en la Europa del sur*, colección Politeya, nº 7, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- SIMMEL, G. (1908) [1990]: "Digressions sur l'étranger", en GRAFMEYER, Y.; y JOSEPH, I., *L'École de Chicago*, París, Aubier Montaigne, págs. 53-59.
- SIRVENT, C. (2013): "La crisis. Mi crisis. (Infortunio social y consecuencias psiquiátricas)", *Norte de Salud Mental*, vol. 11, nº 45, págs. 111-116 [<http://revistanorte.es/index.php/revista/article/view/30>].
- THE FAMILY WATCH (2014): *Barómetro de la familia TFW. Situación y perspectiva*, Madrid, The Family Watch [<http://www.thefamilywatch.org/BarometroTFW2014RE.pdf>].
- WALTHER, A.; y STAUBER, B. (2002): *Misleading Trajectories. Integration Policies for Young Adults in Europe?*, Leverkusen, Leske + Budrich Editors.
- WEBER, M. (1956) [1964]: *Economía y sociedad*, México, Fondo de Cultura Económica.